

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LIBERTADES: Un reto para los técnicos

INTRODUCCION

Ultimamente, en varios medios de comunicación, parece haber resucitado el viejo (y nuevo) debate sobre la regulación de la Informática para limitar su influencia negativa en las libertades fundamentales de la persona. Viejo, puesto que ya en los primeros tiempos de la Informática se comenzó a hablar de las posibles influencias negativas que esta nueva Ciencia podría tener.

Nuevo, porque el asunto es de candente actualidad.

Los padres de nuestra Constitución ya tuvieron en cuenta este problema, y recogieron en su artículo 18.4 la necesidad de su regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico:

«La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.»

Casi trece años han transcurrido desde su aprobación y aún no se ha producido esta regulación legal, aunque ya se discute el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.

LA COMISION DE LIBERTADES E INFORMATICA (CLI)

El pasado 5 de abril se celebró en Madrid la Asamblea General Constituyente de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), comisión que nace como reza en sus documentos fundacionales, «con el objetivo de promover de forma permanente y estable en todo el Estado español el desarrollo y la protección de los derechos individuales y colectivos, en lo que se refiere al uso de las Tecnologías de la Información (TI), tanto por las diversas administraciones públicas como por cualquier otra persona o entidad jurídica, pública o privada, fomentando en la opinión pública la conciencia sobre su

importancia para el progreso en una sociedad democrática crecientemente tecnificada».

La CLI está constituida por un conjunto de entidades y asociaciones, preocupadas por la influencia de las TI en las libertades individuales. Estas asociaciones son de carácter no lucrativo y se asocian con vocación de independencia frente a los poderes públicos. En concreto, los miembros fundadores son:

- ACPC (Asociació Catalana de Periodisme Científic).
- AEIA (Asociación Española de Informática y Automática).
- AESUTI (Asociación Española de Usuarios de Tecnologías de la Información).
- APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos de España).
- A-SOFT (Asociación Española de Empresas de Software).
- ATI (Asociación de Técnicos de Informática).
- CC.OO. (Confederación Sindical de Comisiones Obreras).
- Jueces para la Democracia.
- UGT (Unión General de Trabajadores).

La Comisión está abierta a la incorporación de nuevos miembros, siempre que éstos no sean individuos particulares, empresas privadas, ni, en general, entidades con ánimo de lucro. Tampoco, como es lógico, componentes de los diversos poderes y administraciones públicas.

Los objetivos y principios básicos de esta comisión quedan expresados en los documentos fundacionales de la misma, conocidos como Protocolo Fundacional, a saber el Manifiesto Fundacional y el Objetivo (ya reproducido arriba) y Principios Básicos:

1. El Protocolo Fundacional.

El Protocolo Fundacional comienza pidiendo una reflexión pública, tanto de los poderes públicos como de los movimientos culturales y sociales para

neutralizar los negativos efectos contaminantes del manejo incontrolado de las TI sobre los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos. Afirma que es necesario corregir las asimetrías que el uso masivo de bancos de datos introduce en las relaciones entre los poderes públicos y privados, para una mejor protección de los ciudadanos.

No se pretende limitar, sin embargo, el uso de los medios automatizados que mejoren la prestación de los servicios, puesto que nadie está dispuesto a prescindir de los frutos de las TI, sino establecer sistemas de control que eviten la desviación de datos hacia fines no autorizados: los poderes públicos deberían asumir la dimensión de los peligros informáticos, reforzando las iniciativas de los individuos y grupos sociales para transmitir a la opinión pública la gravedad del uso indebido de la información y su tecnología.

Afirma que puede resultar fácil llamar la atención frente a las prácticas que directamente agreden la libertad y la dignidad de la persona, pero más difícil transmitir a los ciudadanos la imagen exacta del riesgo que supone el uso incontrolado de las TI. Es positivo que diferentes sectores hagan frente a este desafío, con una perspectiva multidisciplinar, y con un espíritu de colaboración y crítica.

2. Principios básicos

Promocionar los derechos individuales y colectivos donde éstos pudieran ser amenazados o vulnerados por las TI.

Impulsar las acciones e iniciativas necesarias para cumplir su objetivo, en el marco de la Constitución, y respetando las competencias y funciones de los poderes y organismos públicos.

Establecer relaciones de cooperación con otros organismos similares en otros países, en especial europeos y latinoamericanos, así como con entidades, públicas y privadas, cuyos fines sean coincidentes con el objetivo de la CLI.

El primer paso de la CLI en el presen-

te año es darse a conocer ante la opinión pública. Su plan de acción para 1991 incluye el establecimiento de relaciones de cooperación con la Oficina del Defensor del Pueblo y homólogos autonómicos, así como ser reconocido interlocutor válido de los Poderes Públicos.

LA LEY ORGANICA PARA LA REGULACION DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE CARACTER PERSONAL

La necesidad de esta ley orgánica, cuyo anteproyecto ya se discute, no sólo se deduce del imperativo constitucional, sino también del análisis de la situación en los demás países de nuestro entorno.

Por ejemplo, el Consejo de Europa adoptó en 1981 un Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento en 1984. Países como Austria, Canadá, Dinamarca, E.E.UU., Francia, Noruega, Reino Unido, la República Federal de Alemania, Suecia y, recientemente, Portugal, tienen en vigor normas para la protección de datos personales. También las Comunidades Europeas tienen previsto aprobar una Directiva del Consejo en este sentido.

Según la Exposición de Motivos con la que el propio anteproyecto de la ley comienza, ésta tiene por objeto regular la libre circulación de los datos personales, garantizando la protección del honor, la intimidad familiar y personal y el libre ejercicio de los derechos de las personas, y prohibiendo el tratamiento, excepto en ciertos casos y con garantías previstas de aquellos que se refieran a la ideología, las convicciones religiosas o filosóficas, creencias, opiniones políticas y la afiliación sindical, de los que revelen el origen racial o étnico, de los relativos a la salud física y psíquica y a la vida sexual, y de los referentes a la comisión de delitos y faltas y al cumplimiento de condenas.

Afirma también que, en general, se necesitará el consentimiento del afectado para la recogida de los datos y deberá informarse a éste del propósito de su uso, que deberá ajustarse a la finalidad para la que se recojan. También garantiza que los datos sean conservados exactos y al día. En general, confirma que los derechos que asisten a las personas interesadas son muy amplios.

La ley también regula el movimiento internacional de datos y crea un nuevo organismo autónomo, la Comisaría de Protección de Datos, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de esa ley.

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES

Una de las más prestigiosas asociaciones profesionales estadounidenses, la *Association for Computing Machinery* (ACM), tiene en marcha un Comité sobre Libertad Científica y Derechos Humanos, encargado de aquellas situaciones de amenaza a la libertad científica y a los derechos humanos, por parte de las Tecnologías de la Información.

La preocupación por la privacidad de los datos también se manifiesta en su Código de Conducta Profesional. En él se pide explícitamente a los profesionales que integran la asociación que en su trabajo profesional consideren siempre el principio de privacidad individual y la protección adecuada de los datos de carácter personal.

Esta asociación, junto con la prestigiosa, también de carácter profesional, *Computer Society of the Institute of Electrical and Electronic Engineer* (IEEE-CS), han elaborado una propuesta de currículos para los estudios de Informática Superior. Esta propuesta, que por cierto ha sido recientemente presentada en nuestro país, contempla la preocupación de ambas asociaciones por las influencias que la Informática puede tener en la sociedad, y propone la inclusión en los planes de estudio de Informática superior de materias que hagan reflexionar a los futuros informáticos acerca del impacto social, cultural y ético de su trabajo, como complemento a la formación técnica.

También la Federación Internacional para el Proceso de la Información (IFIP) muestra preocupación por el tema: en su duodécimo Congreso Mundial, que se celebrará en Madrid en el mes de septiembre de 1992, hay una línea de trabajos titulada «Vulnerabilidad de la Sociedad de la Información: Aspectos Sociales, Legales y de Seguridad», y dedicada íntegramente al estudio y debate de estos temas.

OTROS ENFOQUES

Hablaba al comienzo de un viejo debate. Me remonto ahora al año 1984, en el que ya en nuestro país se hablaba de estos temas. Sugiero al lector interesado que relea un excelente artículo del profesor Sáez-Vacas, publicado en la revista *Bit* (número 34, 1984) y titulado «El núcleo duro de la informática y los derechos humanos».

En este artículo se muestra que los enfoques adoptados, tanto por nuestra Constitución como por las leyes vigentes en países de nuestro entorno, son sólo la punta de un iceberg, en el sentido que no sólo pueden estar amenazados los derechos de intimidad y privacidad por el uso no adecuado de la informática.

Otros derechos, como el derecho al trabajo, a la propiedad, a la salud, e incluso a la propia libertad, pueden verse afectados por el complejo impacto de las TI sobre nuestra sociedad.

CONCLUSION

Dentro de una perspectiva más amplia, que considere el conjunto de las Tecnologías de la Información, no sólo la Informática, debería considerarse cómo pueden éstas afectar al conjunto de los derechos humanos, desde una perspectiva globalizadora. Es necesaria una continua reflexión y esfuerzo por parte de todos sobre este tema, especialmente por parte de nosotros, los técnicos, que en todo momento hemos de tener presente las repercusiones sociales y éticas de nuestro trabajo en la organización social.

Ahora que está en marcha la reforma de los planes de estudio, es el momento de contemplar estos aspectos sociales desde los comienzos de la formación de los futuros técnicos, incluyendo materias en los currículos que inciten a esta reflexión. Quizá la propuesta conjunta ACM/IEEE-CS pudiera servir de referencia o punto de partida. Un Código Deontológico debería estar siempre presente en el trabajo diario de los profesionales, para que esta posible amenaza nunca llegue a convertirse en realidad. En nuestras manos está.

José Miguel Goñi Menoyo
Departamento de Matemática Aplicada
a las Tecnologías de la Información
Universidad Politécnica de Madrid.